



06-1017

*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

*24 de Noviembre de 2010.  
Ref. D - 03-mf-10*

*Licenciada  
Ana Isabel Antillón  
Directora Legislativa  
Congreso de la República  
Su Despacho*

*Licenciada Antillón:*

*De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias.*

*Remito el Dictamen Favorable con Modificaciones de la Iniciativa de Ley identificada con el No. 4273 de Dirección Legislativa, que dispone aprobar reforma al Decreto 51-92 Código Procesal Penal, solicitándole se sirva efectuar los procedimientos respectivos para que la misma sea incorporada a la agenda legislativa para ser conocida por el Honor. H. Pleno del Congreso de la República.*

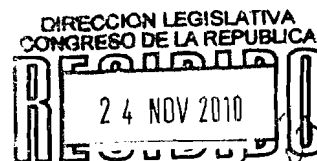
*Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo.*

*Deferentemente,*

*Licenciada Violeta Montenegro  
Presidenta*



*N.M/mf  
c. Archivo*



*NOTA: 8037*



00118



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

**INICIATIVA 4273 QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO PROCESAL PENAL.**

**DICTAMEN**

**HONORABLE PLENO:**

Con fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diez, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia la iniciativa que dispone aprobar Reformas al Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, para su estudio y dictamen correspondiente. Dicha iniciativa se encuentra identificada con el Registro Número 4273 de Dirección Legislativa, y fue presentada por el Organismo Judicial el 13 de septiembre del año en curso.

**ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA:**

Como lo hace ver la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la exposición de motivos de la iniciativa, la entrada en vigencia del Código Procesal Penal actual *"sentó las bases de un enjuiciamiento acusatorio regido por los principios de constitucionales, los acuerdos y los tratados internacionales que rigen el proceso, con el fin de resolver el conflicto penal de la forma más justa para la víctima y más racional para el acusado"*.

Lo anterior, sin embargo, no se ha cumplido en relación principalmente a la víctima quien dentro del proceso penal ha quedado desprotegida, quedando su interés relegado a un segundo plano.

Aunque como también lo hace ver la Corte Suprema de Justicia dentro de las reformas que ha sufrido el Código Procesal Penal, y especialmente, las últimas incorporadas a través del decreto 18-2010 del Congreso de la República, se logró entre otros avances *"consolidar la oralidad y los principios que le son propios"*, la presente iniciativa, puede afirmarse que después de dieciséis años de vigencia del Código Procesal Penal, representa el final *"de la etapa de readecuaciones normativas"* del mismo.

A raíz de lo anterior y con el fin de poder tener otros puntos de vista sobre la presente propuesta, se realizaron reuniones el 1, 15 y 28 del mes de octubre, por parte de la Comisión Extraordinaria de Reformas al Sector Justicia y se recibieron las opiniones tanto orales como escritas de:

- El Ministerio Público (MP);



06-19



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

- La Procuraduría General de la Nación (PGN);
- El Procurador de los Derechos Humanos (PDH);
- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG);
- El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG);
- La Asociación de Jueces y Magistrados (AJM);
- La Fundación Sobrevivientes y la Fundación Madres Angustiadas, entre otras.

### **FINALIDAD DE LA INICIATIVA**

Tomando nuevamente lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia está Comisión al dictaminar entiende que el objeto de la presente iniciativa es *"adecuar la administración de justicia a la realidad nacional y permitir, con un menor costo, desarrollar y potenciar los recursos económicos y humanos existentes en el sector justicia así como visibilizar al sujeto procesal víctima, y a la vez comparte dicha necesidad, por lo que después del análisis de la misma puede concluir que la propuesta, tal y como lo dice la Corte Suprema de Justicia, está dirigida a:*

1. *"Ampliar el acceso de la justicia a las víctimas y generar, así, condiciones para la tutela judicial efectiva;*
2. *Fortalecer la acción penal a cargo del Ministerio Público y facilitar la persecución y sanción de delitos;*
3. *Activar la judicatura de paz, para resolver las causas por delitos menos graves mediante un procedimiento específico, así como verificar la efectiva respuesta del Ministerio Público a los requerimientos de las víctimas.*
4. *Crear condiciones objetivas para que los requerimientos de la acción penal tengan la debida respuesta judicial inmediata, con el objeto de visibilizar la lucha contra la impunidad".*

### **CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:**

#### Generales:

1. La iniciativa se compone de 18 artículos, dentro de los cuales se incluyen nueve reformas, cinco artículos adiciones, uno de derogatorias expresas (en las cuales se pretende derogar casi en su totalidad lo referente a la *"reparación privada"*), un transitorio, un artículo transitorio especial que conlleva una reforma tácita a Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, decreto 21-2009 del Congreso de la República y finalmente el artículo de la vigencia.



00 020



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

2. La Comisión considera positivos los objetivos que buscan alcanzarse con el planteamiento de la presente iniciativa y los comparte. Sin embargo considera que, después de escuchar las opiniones vertidas por las distintas instituciones que tuvieron a bien hacerlo, el proyecto debe modificarse en ciertos aspectos al emitir dictamen favorable.
3. Comparte la necesidad que se le dé a la víctima del delito una tutela judicial efectiva, que se traduzca principalmente en: visibilizarla al hacer explícito el reconocimiento general que debe de procurarse una tutela judicial efectiva, al igual que a las otras partes; resguardar su derecho a ser informada; eliminar la figura del actor civil tal y como está concebida actualmente a fin de eliminar obstáculos en el proceso; facultarla para objetar la desestimación cuando esta se pretenda; entre otras. Lo cual responde en parte a la *Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de las Naciones Unidas*<sup>1</sup>, que establece entre los derechos de las víctimas: el de ser tratadas con respeto por su dignidad; a tener acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño; a ser informadas de tales derechos; a tener en cuenta la opinión en las etapas apropiadas siempre que sus intereses estén en juego; a recibir asistencia apropiada y a que se adopten medidas para minimizarles molestias, demoras, así como a otorgarles seguridad contra intimidaciones y represalias, y facilitarles la conciliación.
4. De igual forma considera positiva la incorporación de la figura de los "*tribunales unipersonales de sentencia*", así como de los procedimientos para delitos flagrantes y procedimientos simplificados para delitos cuya pena máxima de prisión no exceda de 5 años, a fin de poder descongestionar el sistema. Aunque hace la salvedad, que esta Comisión entiende que para tener viabilidad esta propuesta, la Corte Suprema de Justicia (ponente de la iniciativa), ha contemplado la implicación en relación a recursos materiales y humanos que la implementación de la misma va a tener, en virtud de que como mínimo, a manera de citar algunos ejemplos, cada "*tribunal unipersonal de sentencia*" deberá contar con el espacio físico y el personal adecuado para poder llevar a

<sup>1</sup> *Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder*, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.



000021



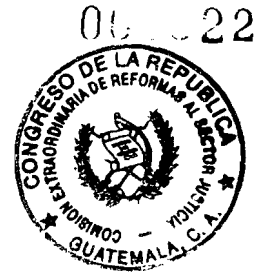
*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

cabo las audiencias, entre otras cosas. Aspecto del proyecto que también hace ver el Ministerio Público en relación esa institución al opinar que: *"en consideración a que la reforma prevé una mayor cantidad de audiencias y procesos penales, es necesario fortalecer al Ministerio Público para poder cumplir con las exigencias que se avizoren de la reforma procesal. En ese sentido, si no hay un incremento en el número de agentes fiscales, el Ministerio Público no podrá asistir simultáneamente a las audiencias de procedimiento preparatorio, intermedio y los debates ante jueces de sentencia, jueces de paz y tribunales de sentencia. Se prevé que se puedan triplicar el número de audiencias, con el consiguiente colapso del personal fiscal"*, lo que concuerda con lo dicho por el Magistrado representante de la Corte Suprema de Justicia, en la reunión del día 28 de octubre del presente año, atendiendo a la invitación que se le hiciera por parte de esta Comisión cuando dijo que: *"La reforma lo que persigue es 3,650 sentencias de mil que se estaban dictando"*. Pero entiende esta Comisión, por ende, que estos aspectos son de carácter administrativo-financiero propio de cada institución y que ya fueron sopesados por los ponentes de la presente iniciativa.

5. Otro aspecto importante es que en la propuesta se habla de víctima y se entiende que se hace desde el punto de vista doctrinario, que de acuerdo a estándares internacionales no solamente se refiere a las personas que *"individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente"*<sup>2</sup> sino que también a *"los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización"*<sup>3</sup>. Sin embargo para efecto de no contrariar lo que establece en su artículo 11 la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República, debe entenderse que el Código Procesal Penal, con las últimas reformas contenidas en el ya citado decreto 18-2010, denomina a la víctima como agraviado, incluyendo en este último concepto, además de las personas antes indicadas de acuerdo a la doctrina, a otras descritas en los numerales 3 y 4 del artículo 117 del Código Procesal

<sup>2</sup> Loc.cit. Literal A.1.

<sup>3</sup> Ibid. Literal A.2.



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Penal. En esa línea, esta Comisión ha considerado que a fin de guardar siempre el objeto de la propuesta que es visibilizar a la víctima y por ende nombrarla taxativamente, se mencione siempre *"la víctima o el agraviado"*.

Específicas:

1. En relación al artículo 1 de la iniciativa que pretende reformar el artículo 5 del Código Procesal Penal:

Este artículo pretende modificar en su totalidad la forma en que están redactados actualmente los fines del proceso. Al respecto argumenta la PGN: *"En cuanto a reformar..., la determinación "esclarecimiento de los hechos" parece un concepto más bien sociológico, por lo que se propone utilizar el término acorde no sólo con la disciplina criminalística sino al tenor del Código Procesal Penal, que es la investigación de los hechos"*. La CICIG por su parte expone que *"cabe señalar que los puntos 2 y 4 que se proponen, no se refieren a fines del proceso. El respeto a los derechos fundamentales equivale a las "reglas del juego", no a los fines. La mediación penal tampoco es un fin del proceso, sino un mecanismo de evitación del mismo por medio de una técnica alternativa de resolución del conflicto"*. Y la AJM dice: *"la reforma a este artículo puede resultar innecesaria"*.

Esta Comisión comparte lo antes expresado, pero a su vez entiende la intención de la CSJ al querer reconocer también como fin del proceso que la víctima tenga una atención, protección y reparación efectiva, por lo que es del criterio que debe respetarse el artículo tal y como se encuentra actualmente regulado en el Código Procesal Penal, agregándole el último párrafo de la propuesta. De esa forma, como lo expone el MP, se logra reafirmar los derechos de las víctimas y a la vez *"se enfatiza en mantener el equilibrio y que el proceso propenda a buscar las legítimas expectativas de ambos"*.

2. En relación al artículo 4 de la iniciativa que pretende agregar un artículo nuevo 107 Bis al Código Procesal Penal:

Se elimina el segundo párrafo en virtud de que resulta innecesario ya que actualmente ya es permitido que el MP se haga asesorar de peritos y consultores técnicos.



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

3. En relación al artículo 5 de la iniciativa que pretende agregar un segundo párrafo al artículo 108 del Código Procesal Penal:

En relación a este artículo la CICIG manifestó que: *"Es importante que la Ley prevea un mecanismo para hacer valer tales derechos, pero se considera que las facultades que pretende darse al juez en orden a cualificar la investigación y más aún a exigir resultados, afectan la autonomía del Ministerio Público. En efecto, la reforma...apunta a operativizar la obligación ya existente en la Ley, en torno a informar a la víctima. Además se plantea un verdadero recurso de acceso a la información del cual la víctima es titular. Esta innovadora medida, contienen empero resabios de proceso inquisitivo en cuanto coloca al juez en situación de dirigir la investigación penal, incluso mediante criterios subjetivos, como se aprecia de la lectura del párrafo respectivo **"...el juez de paz considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal resultados cualitativos..."**. Se sugiere la conveniencia de estudiar un mecanismo de carácter administrativo... para que el recurso planteado no devenga en una intromisión de las facultades que le correspondería al MP.... Se puede ordenar la realización de diligencias o acciones pero no resultados, puesto que éstos no están garantizados".* El MP opina también que previo a acudir a juez deba agotarse un procedimiento administrativo a través de una queja ante el Fiscal distrital o jefe de sección y que el plazo de 20 días se amplíe a 30. Esta Comisión comparte la preocupación manifestada por la CICIG en relación a la solicitud de resultado cualitativos, sin embargo partiendo de que efectivamente lo que se busca es que la víctima sea informada entiende que esto sólo puede hacerse si quien debe hacerlo sabe que hay una consecuencia por su omisión.

A raíz de lo anterior con el fin de guardar el espíritu de la propuesta, pero no trastornar el procedimiento propuesto por la CSJ esta Comisión considera, tomando también en consideración la opinión de la asesoría de diputados miembros de la comisión, que debe cambiarse la forma en que está planteada la reforma en relación a los **"resultados cualitativos"**, por la **"obligación de informar sobre los avances"**, y en caso no los haya que en el término de 30 días se le demuestre al juez que efectivamente ya los hay o, en su defecto, se le indique las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más la investigación, caso contrario el juez podrá determinar



06-12-24



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

que efectivamente la inacción del fiscal amerita certificar al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento.

4. En relación al artículo 7 de la iniciativa que pretende reformar el artículo 124 del Código Procesal Penal:

La PGN es de la opinión de que en el primer párrafo se agregue una definición de los alcances de la reparación, lo cual en su momento fue bien visto por el Magistrado representante de la CSJ y no altera el espíritu de la reforma, sino que lo reafirma.

En relación a la posterior audiencia de reparación que plantea la propuesta también se manifestó la PGN en la forma siguiente: *"resulta innecesaria la posterior audiencia de reparación pues los montos de la pretensión ya se han fijado por la víctima en las conclusiones del debate"*.

El MP por su parte opinó que: *"No constituye un avance en la forma en que se encuentra actualmente redactado, aun cuando se establece que se dicte la responsabilidad civil dentro de tercer día, de haber dictado sentencia condenatoria. Lo más apropiado es mantener el sistema actual, pero haciendo algunas modificaciones que faciliten el ejercicio de la acción civil en el proceso penal. La modificación en régimen de la acción civil y penal es un punto prioritario y debe ser enfocada para lograr la más fácil admisión en el proceso, ser ejercitada ex officio por el agraviado"* y posteriormente propone que se reformen tres artículos.

La CICIG, alcanza a tocar el punto fundamental de la reforma al establecer que: *"Se pretende que la acción civil se entable una vez finalizado el proceso penal...En el juicio y, consiguientemente, en la sentencia, deben ventilarse conjuntamente la acción penal y la civil, pues son inseparables, salvo que el perjudicado haya renunciado expresa y terminantemente al ejercicio de la acción civil. De lo contrario, se puede ocasionar victimización secundaria, dado que la víctima que tendría que seguir dos procesos: el penal y el civil. Por otro lado, se puede ocasionar un desgaste de los recursos del Estado, al obligarse a resolver en dos procedimientos lo que podría resolverse en uno...la reforma tiene la ventaja de que no es necesario que la víctima se constituya como parte. Una posibilidad que podría considerarse sería el derecho de la víctima a ser informada y decidir, acerca de su posibilidad de accionar civilmente desde el principio o esperar el resultado de la sentencia"*.





06.025



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Esta Comisión al hacer el análisis de las reformas propuestas considera que el objeto de la reforma, como se indica antes, es lo que hace ver la CICIG. Esto es que la víctima tenga la oportunidad, sin haberse constituido como parte dentro del proceso, que una vez esté segura de que el imputado ha sido encontrado responsable y por ende condenado, pueda ejercitar la acción civil en la audiencia de reparación. Sin embargo en la forma en que está planteada la propuesta le otorga nuevas funciones a los jueces de ejecución penal, al delegar en ellos la obligación de ser quienes requieran el pago y decretar las medidas cautelares. Al respecto manifiesta la AJM: "... *con la propuesta se está incrementando el trabajo a los jueces de ejecución, para que requieran de pago, lo cual es competencia de los jueces civiles, incluso, el requerimiento de pago es un procedimiento dentro del cual se le faculta para dictar medidas cautelares de aseguramiento de los bienes que sean suficientes para cubrir el monto de la reparación hasta el cumplimiento efectivo...* 6. *Si lo que se pretende es acelerar el proceso de ejecución en la vía civil,...no es a través de mezclar las competencias civiles y penales en esta materia*". Esto último se ve refrendado por lo que agrega la PGN: "*Haciendo un análisis integral acerca de la reforma al Artículo 124 y los artículos que se pretenden derogar, se arriba a la conclusión que la reforma al 124 no es suficiente ni garantiza los derechos procesales de aseguramiento de bienes que puede intentar la víctima desde el inicio del procedimiento para garantizar las resultas del proceso y garantizarse una efectiva reparación*".

A raíz de lo cual esta Comisión considera que se hace necesario modificar el numeral 4 a fin de que las medidas cautelares puedan ser solicitadas y decretadas incluso antes de llegar al punto del proceso en que se realice la audiencia de reparación. Y en relación a la "mezcla" entre lo civil y lo penal se elimina la cuestión del requerimiento de pago porque se entiende que ello es una facultad que atañe a un juez de ejecución civil.

5. En relación al artículo 8 de la iniciativa que pretende agregar reformar el artículo 310 del Código Procesal Penal:

Se estima que es necesario agregar un último párrafo de acuerdo a lo que establece el MP en su opinión: "*La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni se eximirá al*



01-26



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

*Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora.*

A fin de asegurar que siempre se pueda reabrir el procedimiento.

6. En relación al artículo 16 de la iniciativa:

Esta Comisión entiende que lo que está proponiendo la CSJ es quitarle la responsabilidad de la Cámara Penal para calificar qué delitos son de mayor riesgo cuando así lo plantee el MP. A raíz, de lo anterior y en virtud de que no hay ningún argumento para dicho cambio esta Comisión consideró que no era aconsejable aceptar dicha propuesta.

7. En relación al artículo 17 de la iniciativa que pretende derogar los artículo del 135 al 140 del Código Procesal Penal:

En la iniciativa se planteó como se indicó al inicio eliminar la figura del actor civil y con ella todos los obstáculos que puede significar a la víctima el hecho de tener que constituirse en ello en determinados momentos del proceso. Sin embargo en la iniciativa también se pensó que debía derogarse la figura del tercero civilmente demandado. A ese respecto opinó el MP lo siguiente: *"En cuanto a la derogatoria de la figura del tercero civilmente demandado, que es la sección tercera no parece adecuado, tanto por una cuestión de economía procesal como por el hecho que el tercero civilmente demandado debe comparecer a defenderse"*. En esa misma línea opinó la PGN: *"Al derogar del artículo 125 al 140 se deroga también, entre otras figuras importantes, la del tercero civilmente demandado, pudiendo dejar acéfala la reclamación de la víctima dentro del proceso"*. Ante estas observaciones que abordan el tema desde dos puntos de vista válidos, el Magistrado representante de la CSJ manifestó que estaban de acuerdo con mantener la vigencia de estos artículos.

Esta Comisión considera por ende que la derogatoria no abarque lo relativo a la figura del tercero civilmente demandado.

**CONCLUSIONES**

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, emite **"DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES"** a la Iniciativa de Ley identificada con el número cuatro mil doscientos setenta y tres (4273) de Dirección Legislativa, la cual contiene Reformas al Decreto Número 51-



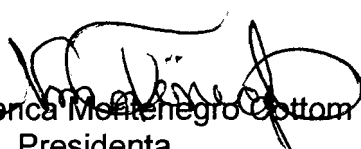
06-11-27

*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, por ser oportuna y conveniente, para que el honorable Pleno decida sobre el mismo.

**DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR JUSTICIA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.**



  
Nineth Varela Montenegro Cottom  
Presidenta

  
Jorge Mario Barrios Falla  
Vicepresidente

Carlos Rafael Fión Morales  
Secretario

  
Armando Enrique Sánchez Gómez

  
Rosa María Angel Madrid de Frade

Gladys Anabella De León Ruiz

Julio Recinos Castañeda

  
José Alberto Gándara Torrebiarte

  
Carlos Gerardo Gordillo Marroquín



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

06-1-28

  
Mario Roderico Mazariegos de León

Roberto Belarmino Méndez Urizar

Rubén Darío Morales Veliz



00129



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

**DECRETO NUMERO \_\_\_\_\_-2010**

**DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

**CONSIDERANDO**

Que las debilidades del sistema de justicia penal deben ser atendidas y resueltas con medidas oportunas, de aplicación inmediata y de bajo costo, con el aprovechamiento máximo de los recursos económicos y humanos y que la justicia es un derecho humano de impostergable cumplimiento.

**CONSIDERANDO**

Que el acceso a la justicia exige el ejercicio de la acción penal y la atención oportuna de las denuncias de las víctimas de delitos, que resuelvan los conflictos penales para prevenir hechos delictivos y sancionar a los responsables, en el marco de los principios que garantizan el debido proceso.

**CONSIDERANDO**

Que la asignación de competencia a los jueces de paz, con un procedimiento simplificado, y la instauración de jueces de sentencia para conocer casos que no sean calificados de mayor gravedad generará de inmediato condiciones para responder a la demanda de justicia y con ello la posibilidad de aumentar el número de sentencias.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a), de la Constitución Política de la República de Guatemala.

**DECRETA:**

Las siguientes:

**REFORMAS AL DECRETO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA,  
CODIGO PROCESAL PENAL**

**Artículo 1.** Se reforma el artículo 5, el cual queda así:



09-10-30



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

**"Artículo 5. Fines del proceso.** El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido; el establecimiento de la posible participación del sindicado; el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la ejecución de la misma.

**La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos."**

**Artículo 2.** Se reforma el artículo 43, el cual queda así:

**"ARTICULO 43.- Competencia.**

Tienen competencia en materia penal:

- 1) Los jueces de Paz
- 2) Los jueces de primera instancia;
- 3) Los Jueces Unipersonales de Sentencia
- 4) Los tribunales de sentencia;
- 5) Los Jueces de Primera Instancia por Procesos de Mayor Riesgo
- 6) Tribunales de Sentencia por procesos de mayor riesgo
- 7) Las salas de la corte de apelaciones;
- 8) La Corte Suprema de Justicia; y
- 9) Los jueces de ejecución."

**Artículo 3.** Se reforma el artículo 48, el cual queda así:

**"ARTICULO 48.- Jueces y Tribunales de Sentencia.** Los tribunales de sentencia, integrados con tres jueces, de la misma sede judicial, conocerán el juicio y pronunciarán la sentencia respectiva en los procesos por delitos contemplados en el artículo 3 del Decreto Número 21-2009 del Congreso de la República, cuando el Fiscal General no solicite el traslado de la causa a un tribunal o juzgado para procesos de mayor riesgo.

Los jueces que integran el tribunal de sentencia conocerán unipersonalmente de todos los procesos por delitos distintos a los de mayor riesgo y que no sean competencia del tribunal colegiado."

**Artículo 4.** Se adiciona el artículo 107 Bis, el cual queda así:



00131



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

**"ARTICULO 107 Bis. Auxiliares fiscales.** Los auxiliares fiscales que sean abogados, pueden intervenir en todas las instancias del proceso penal sin restricción alguna y sin el acompañamiento del agente fiscal."

**Artículo 5.** Se adiciona un segundo párrafo al artículo 108, el cual queda así:

**"ARTICULO 108.- Objetividad.**

En el ejercicio de su función, y en un plazo no mayor de quince días de recibida la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. La víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir a juez de paz para que éste requiera en la forma más expedita que, en cuarenta y ocho horas, el fiscal le informe sobre el avance del proceso. Si del informe o ante la falta de éste, el juez de paz considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días le informe **de nuevos avances, o en su defecto sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más en la investigación**, bajo apercibimiento de certificar al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento, constituyendo falta grave."

**Artículo 6.** Se adiciona el artículo 108 Bis, el cual queda así:

**"Artículo 108 Bis. Facultades.** El Ministerio Público al recibir la denuncia o el requerimiento judicial de informe a que se refiere el artículo anterior, puede pedir al juez de paz del lugar donde se cometió el hecho delictivo, que practique las actuaciones contenidas en las literales a) al d) del artículo 552 Bis del Código Procesal Penal. La solicitud del fiscal es la condición procesal para que el juez de paz pueda practicar las actuaciones de las literales descritas.

Los centros de mediación de la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos del Organismo Judicial podrán practicar diligencias de mediación, en los casos que le sean requeridos por el Ministerio Público. Los acuerdos de mediación alcanzados ante estas instancias constituirán título ejecutivo, en su caso, sin necesidad de homologación."

**Artículo 7.** Se reforma el artículo 124, el cual queda así:

**"ARTICULO 124.- Derecho a la reparación digna.**

La reparación, a que tiene derecho la víctima, comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, **que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de**



00...32



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

**derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible** y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito; para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas:

1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día.
2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias, y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia.
3. Con la decisión de reparación, y la previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia escrita.
4. **No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación.**
5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme.

**Si la acción reparadora no se hubiere ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil."**

**Artículo 8.** Se reforma el artículo 310, el cual queda así:

**"ARTICULO 310.- Desestimación.**

Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará, dentro de los veinte días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y **a la víctima o agraviado**, quien tendrá la oportunidad, dentro de los diez días siguientes, a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal.





000033



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima, o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar.

**La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora."**

**Artículo 9.** Se reforma el artículo 344, el cual queda así:

**"ARTICULO 344. Citación a juicio.**

Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el Tribunal de Sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas.

Dentro de los cinco días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá de realizarse dentro de los tres días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo, para el efecto se convocará a todos los intervinientes."

**Artículo 10.** Se reforma el artículo 368, el cual queda así:

**"ARTICULO 368.- Apertura.**

El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieren sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra, en su orden, a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura."

**Artículo 11.** Se reforma el artículo 378, el cual queda así:

**"ARTICULO 378.- Examen de testigos y peritos.**

El presidente identificará al testigo con su nombre y el documento personal que lo identifique válidamente, e inmediatamente concederá la palabra a la parte que lo propuso para que lo examine sobre idoneidad, hechos y comparecencia al tribunal;



01-1-34



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

seguidamente concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que lo examinen o contra examinen.

El presidente del Tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste a preguntas capciosas e impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, decidiendo inmediatamente el tribunal."

**Artículo 12.** Se reforma el artículo 432, el cual queda así:

**"ARTICULO 432.- Reenvío.**

Si la Corte de Apelaciones funda su sentencia en violación de ley procesal que constituya un defecto del procedimiento del juicio oral y público previo a la sentencia, anulará la sentencia impugnada y ordenará su corrección, sin los vicios denunciados, a los jueces que intervinieron en la deliberación y pronunciamiento de la misma.

Si la sentencia se funda en violación de ley que constituya un defecto de la deliberación o de la sentencia, sin que afecte la validez del juicio oral y público, ordenará la ampliación o modificación de la sentencia a los jueces que intervinieron en la deliberación y pronunciamiento de la misma, fijando como plazo máximo cinco días para cumplir con lo ordenado."

**Artículo 13.** Se adiciona el artículo 465 bis, el cual queda así:

**"Artículo 465 Bis. Procedimiento simplificado.** Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial, aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiera investigación posterior o complementaria rigiendo, aparte de las normas procesales generales, las específicas siguientes:

1. Diligencias previas a la audiencia:
  - a. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado;
  - b. Imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el Fiscal, y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento;
  - c. Tiempo suficiente para preparar la defensa;
  - d. Comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse;
2. Diligencias propias de la audiencia:
  - a. Identificación previa del imputado, como lo establece el artículo 81 del Código Procesal Penal;



00135



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

- b. Imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado, haciendo referencia del hecho verificable y los órganos de prueba con los que pretende acreditarlos en juicio;
- c. Intervención del imputado para que ejerza su defensa material;
- d. Intervención de la defensa y del querellante para que argumente y fundamente su pretensión basada en su teoría del caso;
- e. Intervención del Querellante Adhesivo, Actor Civil, Víctima o agraviado, para que se manifieste sobre las intervenciones anteriores;
- f. Decisión inmediata del juez, razonada debidamente.

Si se declara la apertura a juicio se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal."

**Artículo 14.** Se adiciona el artículo 465 Ter, el cual queda así:

**"Artículo 465 Ter. Procedimiento para delitos menos graves.** El procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial, que aplica para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal con pena máxima de cinco años de prisión. Para este procedimiento son competentes los Jueces de Paz, y se rige, aparte de las normas procesales generales, por las especiales siguientes:

1. Inicio del proceso: El proceso da inicio con la presentación de la acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado;
2. Audiencia de conocimiento de cargos: Esta audiencia debe realizarse dentro de los diez (10) días de presentada la acusación o querella, convocando al ofendido, acusador, imputado y su abogado defensor, desarrollándose de la siguiente manera:
  - a. En la audiencia, el Juez de Paz concederá la palabra, en su orden, al fiscal o, según el caso, a la víctima o agraviado, para que argumenten y fundamenten su requerimiento; luego al acusado y a su defensor para que ejerzan el control sobre el requerimiento;
  - b. Oídos los intervinientes, el Juez de Paz puede decidir:
    - i. Abrir a juicio penal el caso, estableciendo los hechos concretos de la imputación;
    - ii. Desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito o no tener la probabilidad de participación del imputado en el mismo;



01-2036



*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

- c. Si abre a juicio, concederá nuevamente la palabra a los intervinientes a excepción de la defensa, para que en su orden ofrezcan la prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser reproducida en debate, asegurando el contradictorio para proveer el control de la imputación probatoria. Seguidamente el Juez de Paz decidirá sobre la admisión o rechazo de la prueba ofrecida, señalando la fecha y hora del debate oral y público, el que debe realizarse dentro de los veinte días siguientes a la audiencia en que se admite la prueba;
  - d. Las pruebas de la defensa, cuando así se pida en la audiencia, serán comunicadas al juzgado por lo menos cinco días antes del juicio donde serán puestas a disposición del fiscal o querellante;
  - e. A solicitud de uno de los sujetos procesales se podrá ordenar al juez de paz más cercano que practique una diligencia de prueba anticipada para ser valorada en el debate.
3. Audiencia de debate: Los sujetos procesales deben comparecer con sus respectivos medios de prueba al debate oral y público, mismo que se rige por las disposiciones siguientes:
- a. Identificación de la causa y advertencias preliminares por parte del Juez de Paz;
  - b. Alegatos de apertura de cada uno de los intervinientes al debate;
  - c. Reproducción de prueba mediante el examen directo y contra-examen de testigos y peritos, incorporando a través de ellos la prueba documental y material;
  - d. Alegatos finales de cada uno de los intervinientes al debate;
  - e. Pronunciamiento relatado de la sentencia, inmediatamente de vertidos los alegatos finales, en forma oral en la propia audiencia;
- En todos estos casos, cuando se trate de conflictos entre particulares, el Ministerio Público puede convertir la acción penal pública en privada."

**Artículo 15. Transitorio.** En todos los artículos del Código Procesal Penal y demás leyes, en donde se indique Tribunal de Sentencia, debe entenderse que incluye a Jueces de Sentencia y Tribunales de Sentencia.

La implementación de los procedimientos por delitos menos graves en los juzgados de paz, será progresiva, en la medida que se produzca la designación de fiscales y defensores en cada circunscripción, que pueda celebrarse el debate. Para el



01-237



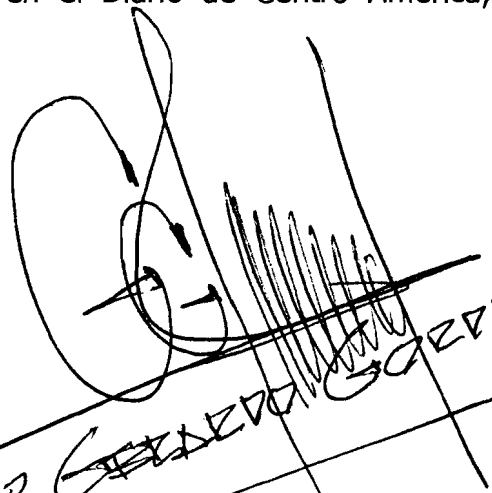
*Comisión Extraordinaria  
de Reformas al Sector Justicia  
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

efecto, por acuerdos interinstitucionales entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Servicio Público del Instituto de la Defensa Pública Penal se determinarán gradualmente las circunscripciones territoriales de aplicación, tomando en consideración los niveles de delincuencia común.

**Artículo 16. Derogatoria.** Se derogan los artículos 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, del Decreto Número 51-2002, y los artículos 119, **125 al 134** y 346 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92, ambos del Congreso de la República.

**Artículo 18. Vigencia.** Este decreto cobrará vigencia, treinta días después de su publicación en el Diario de Centro América, órgano oficial de la República de Guatemala.

DADO...  
PASE...

  
V.P. GENERAL GORDILLO